

## **La política económica del nuevo gobierno de alianza en el Paraguay**

Lila Molinier

### **El contexto nacional**

El Paraguay es un país mediterráneo anclado en el centro de Suramérica, en la Cuenca del río de la Plata, una zona irrigada por los caudalosos ríos Paraná y Paraguay, alimentado por sus numerosos afluentes, y que confluyen en el río de la Plata en su salida al océano Atlántico. Desde 1991, esta zona es asiento del proyecto de integración económica MERCOSUR, entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, como socios plenos, e incluye a Bolivia y Chile, en la zona de Libre Comercio.

En este país, la pobreza y la desigualdad social se cruzan como causas y efectos de las inequidades históricas entre la población de región Oriental y la Occidental, de las zonas urbanas y las rurales, los indígenas, las mujeres y los niños. . En las zonas rurales la incidencia de la pobreza es más alta, 49 de cada 100 habitantes frente a 30 de cada 100 en las zonas urbanas, mientras que la pobreza extrema afecta a 31 de cada 100 de la población rural, frente a 11 de cada 100 habitantes de las zonas urbanas.

La economía nacional es relativamente pequeña en su sistema formal pero más grande si se incluye al sistema informal, no cubierto por las estadísticas oficiales, y cuya estimación más baja le atribuye un promedio de 50 % de la economía formal. Considerando el sistema formal, el producto interno bruto (PIB) total llegó en el 2008 a 16.162 millones de dólares, mientras que el per cápita en 2.593 dólares, nominales, respectivamente. Aunque las actividades económicas de carácter primario aportan alrededor de una cuarta parte del producto interno, tiene un factor de arrastre en la industria, el comercio interno y externo, y las finanzas, pues genera más del 85 % de los productos de exportados. Las actividades de servicios financieros, comerciales y de gobierno, por su parte, son el sector más importante del producto interno bruto. Pero la confianza del sistema financiero internacional público y privado, no sólo está asociada con esta capacidad económica, sino también con las rentas e inversiones anuales que el Estado recibe de las hidroeléctricas binacionales, más de 620 millones de dólares en el 2008.

La economía paraguaya es dependiente y complementaria de las economías vecinas de Brasil y Argentina, y aunque desde 1991 se enmarca dentro del proyecto de integración del MERCOSUR, en los 18 años que lleva, el Paraguay no ha revertido de manera sistemática y generalizada, el estancamiento económico ni el atraso social que le caracterizan, por factores asociados tanto con el considerable desequilibrio estructural entre los tres países, como por la precaria política exterior, en general, y de las relaciones económicas regionales e internacionales del Estado paraguayo.



Las centrales hidroeléctricas binacionales Itaipú y Yacyretá, que el Paraguay tiene y opera con sus vecinos más grandes han sido un factor condicionante del modelo de desarrollo agroexportador e importador, y rentista en los últimos treinta años. La Itaipú Binacional (Paraguay – Brasil) tiene una potencia instalada de 14.000 MW, una de las mayores del mundo; fue construida entre 1975 – 1981, y opera comercialmente desde 1985. Mientras, la Yacyretá Binacional (Paraguay – Argentina) es más pequeña, 3.200 MW, construida desde fines de 1983, opera comercialmente desde 1994. Ambas empresas fueron creadas y están reguladas por tratados binacionales, firmados en 1973, durante los gobiernos dictatoriales en los tres países, y tuvieron una gestión dependiente de las necesidades y los vaivenes de los dos países vecinos, a quienes de hecho el Paraguay debe ceder el excedente de energía no utilizado, o sea, la mayor parte de la energía producida que le corresponde.

De ahí que el nuevo gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) ha planteado e iniciado su renegociación, para restaurar su soberanía energética; obtener un precio justo por la energía cedida (vendida) que le corresponde, y hacer cumplir las cláusulas que le favorecen, no cubiertas por la gestión desigual, no paritaria de ambas empresas.

### **El nuevo contexto político general**

El Paraguay fue gobernado durante 61 años, 1947 – 2008 por un mismo partido político, el Colorado o Asociación Nacional Republicana (ANR), incluida la dictadura del Gral Alfredo Stroessner, durante 35 años (1954-1989) y la transición política hacia la democracia, abierta tras el golpe militar que derrocó al dictador (febrero de 1989) y tutelada por los gobiernos de EEUU. La apertura política, la institucionalización y la descentralización del Estado fueron las ideas fuerza que impulsaron la elaboración y sanción de un nuevo Código Electoral (1990) y una nueva Constitución Nacional (1992), así como la reforma de las instituciones públicas, tanto del área económica como social; del gobierno central como de los departamentales y municipales; del Poder Legislativo y el Poder Judicial. Fueron restituidas la libertad cívica y política, ideológica y de culto, de las personas y las organizaciones, y se cumplió una agenda electoral que renovó las autoridades de los tres niveles de gobierno en forma periódica y pacífica, presididas de las internas partidarias para la elección de las candidaturas por voto directo. Este proceso logró cambios en los liderazgos partidarios, desplazando a la mayoría de los antiguos caudillos, pero sin mejorar la calidad de los mismos, salvo excepciones.

La oposición al Partido Colorado logró construir alianzas electorales en 1993 y 1998, sin resultados eleccionarios positivos. En el tercer intento, la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), entre el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el más grande opositor tradicional, y una alianza de partidos pequeños de izquierda, logró ganar las elecciones generales el 20 de abril de 2008, con Fernando Lugo como Presidente, un obispo de la iglesia católica, renunciante a efectos de su candidatura como tal.

El desgaste, y la fuerte e irreversible división del Partido Colorado, generó fugas de un considerable y decisivo número de votos hacia la APC, voto castigo que permitió que la brecha



entre los resultados para la APC (41 %) y el Partido Colorado (31%) fuera suficientemente amplia para superar los hechos de fraude y la resistencia de los líderes colorados para reconocer al ganador y su derrota electoral.

Entre los ejes de la campaña electoral de la APC, así como de su programa de gobierno, se destacaron los relacionados con las necesidades de cambio en las estructuras y la situación socioeconómicas: (a) la reforma agraria integral; (b) el crecimiento del empleo y la reducción de la pobreza a través del crecimiento económico con equidad; (c) la transparencia en el manejo de los recursos y acciones del Estado, y la lucha contra la corrupción, y (d) la renegociación del Tratado de Itaipú (Paraguay – Brasil)

### **Las definiciones generales de la política económica de la APC**

El Plan Estratégico Económico y Social 2008 – 2013 liderado por el Ministerio de Hacienda, establece que la finalidad de la política económica del gobierno de la APC es mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes del país, sin exclusiones. En sus objetivos estratégicos y en sus estrategias generales se refiere a resultados y orientaciones que enmarcan las acciones que el Estado y la sociedad civil estarían dispuestos a realizar (ver recuadro pagina siguiente)

Su presentación a los miembros de la APC, los gremios empresariales y a las organizaciones del movimiento popular, junto con el Plan de Reactivación Económica 2009 – 2010 que tuvo que ser diseñado e incluido dentro del marco del Plan Estratégico, para dar respuestas concretas a los efectos de la crisis económica mundial, no son suficientes para su apropiación y su uso como un instrumento de gestión de la intervención del Estado, con la participación de los sectores de la sociedad civil

Sobre todo porque dichas presentaciones pidieron mayor claridad y detalle sobre la forma en que van a ser desarrolladas las estrategias, en relación con las situaciones concretas, vinculadas con el área de interés de cada sector. De ahí que existen quejas, reclamos y rechazos frente a las definiciones generales del Plan que deben ser atendidos.

En el caso de la reforma agraria, la estrategia es asociada con la reactivación de la agricultura familiar, pero en realidad sus implicancias son mucho más profundas en el presente y futuro de la economía, la sociedad, el medio ambiente y la cultura nacional, es decir, hace referencia a otro tipo de desarrollo, diferente al actual. En el modelo heredado, la expansión y concentración de los latifundios en los últimos 20 años, se dio a expensas de las tierras fiscales y la pequeña propiedad minifundiaria, y la mayor exclusión social de las familias campesinas.



### Plan Estratégico Económico y Social 2008 – 2013

Objetivos estratégicos:

- (i) *Proseguir el crecimiento económico* pero con mayor generación de empleo y con mejor distribución de ingresos, diversificando las exportaciones para una inserción internacional más estable de la economía, manteniendo los equilibrios macroeconómicos fundamentales.
- (ii) *Fortalecer las instituciones del Estado* para mejorar la eficacia de las políticas públicas, elevar la calidad de los servicios públicos y poner en marcha un sistema estable de reglas del juego que ofrezca garantías jurídicas a las personas y a las inversiones.
- (iii) *Aumentar y mejorar la inversión en áreas sociales*, fundamentalmente en educación y salud, focalizando el gasto público en el combate contra la pobreza extrema.
- (iv) *Alentar la diversificación de la estructura productiva*, preservando el medio ambiente y logrando mejorar el aprovechamiento de los recursos energéticos y humanos disponibles en el país.
- (v) *Impulsar la participación de la sociedad civil y del sector privado en la economía* para fortalecer las micro y pequeñas empresas, en especial las pequeñas fincas agrícolas, aumentando su capacidad competitiva.
- (vi) *Armonizar y coordinar las acciones del gobierno* para apoyar el desarrollo regional descentralizado.

Las estrategias definidas para el logro de dichos objetivos son:

- (i) Mantener *políticas macroeconómicas* consistentes que aseguren la estabilidad y ofrezcan un contexto previsible para la toma de decisiones económicas.
- (ii) Desarrollar un *sistema financiero* sólido y seguro, capaz de ofrecer servicios de calidad a todos los actores económicos sin exclusiones.
- (iii) Mejorar las *empresas públicas* mediante una gestión más profesional, más eficiente y transparente.
- (iv) Modernizar la *administración pública* orientada a facilitar el acceso

Por otro lado, la planificación en la economía ha sido incorporada desde los años sesenta, durante el gobierno de la dictadura de Stroessner, pero su comprensión y apropiación por los propios equipos de gobierno y los sectores económicos involucrados ha sido la excepción. Más aún, cuando desde inicios de la transición política se han gestado una diversidad de planes y programas económicos y sociales sectoriales, y los directamente referidos a la población atendida, resultando difícil su jerarquización y articulación. En el caso del Plan de Reactivación Económica 2009 –



2010 nos parece que ha acaparado la atención, desplazando el interés por el Plan Estratégico al 2013.

La situación real es mucho más compleja aún, como lo muestra el desarrollo del período de estudio y aprobación del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación en el Congreso Nacional, desde el 1 de septiembre pasado. La Comisión Bicameral del Presupuesto ha recortado las asignaciones para las secretarías de Acción Social (a cargo de los programas de protección social y lucha contra la pobreza); de Emergencia Nacional, y del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDERT), instituciones, gestionadas por líderes reconocidos por su militancia en la pastoral social de la iglesia católica, y en los partidos y organizaciones de izquierda, con el objetivo explícito de “evitar o impedir que el Presidente Lugo forme su base social entre la población más pobre”. Esta intención es apoyada por el propio PLRA, partido mayoritario de gobierno de la APC. De hecho, la bancada del PLRA en el Congreso está dividida y no tiene disciplinado su voto a favor de los proyectos del Ejecutivo. Incluso, el Vicepresidente de la República, del PLRA, ha deslindado en repetidas ocasiones su posición y opinión respecto de las decisiones del Presidente Lugo.

### **La gestión en los primeros 15 meses**

Entre las acciones encaradas por el Equipo Económico Nacional y el área social del Poder Ejecutivo se destacan, según los programas puestos en vigencia:

- ✚ La reactivación económica para mitigar los efectos de la crisis económica mundial y de la prolongada sequía (diciembre – febrero), en el contexto del inicio y desarrollo de la temporada agrícola interanual 2008/ 2009, consistió en la expansión monetaria, crediticia y fiscal para dotar de liquidez al sistema financiero; incentivar el crédito para el sistema productivo empresarial; apoyar financieramente a la agricultura familiar, y a las micro, pequeñas y medianas empresas; defender el empleo mediante la ejecución de obras públicas a cargo de las gobernaciones departamentales y municipios, y proteger a la población pobre extremo
- ✚ Las transferencias monetarias a la población pobre extremo, ejecutadas por la Secretaría de Acción Social (SAS), en ese contexto fueron ampliadas, para pasar a cubrir de un total de 20.000 familias en el gobierno anterior, a más de 70.000 familias en el 2009, dentro de una meta que para el 2010 será de 120.000 familias. El área de influencia incluye a 71 distritos de 14 departamentos y los barrios más pobres de Asunción, capital del país; además a 10.000 familias indígenas. Consiste en la entrega de 250.000 a 280.000 guaraníes por familia seleccionada ( 52 a 59 dólares al cambio de diciembre 2009). Por otro lado, se racionalizó la atención a los veteranos y lisiados de la Guerra del Chaco, mediante un Programa de protección a los adultos mayores, focalizado en los mismos, y beneficia a más de 1.200 titulares. También fueron ampliados los programas de atención directa a los niños, niñas y adolescentes con mayor vulnerabilidad, a cargo de la Secretaria Nacional de la Niñez y Adolescencia.



- ✚ La reforma agraria integral: Es una de las acciones del gobierno que mayor frustración generó en las organizaciones campesinas, y mayor miedo, hasta niveles paranoicos, en los gremios agropecuarios de exportación y la oposición parlamentaria. La creación y formación de la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria (CEPRA), liderada por el INDERT e integrada por representantes de todos los ministerios, secretarías, organismos técnicos especializados, empresas públicas proveedoras de los servicios públicos de infraestructura, fue novedosa y promisorio al momento del lanzamiento del Plan Nacional de Reforma Agraria a fines de enero 2009, para seis departamentos priorizados del país, donde se elaboraron los diagnósticos de necesidades en forma multidisciplinaria y participativa con las comunidades. Pero sólo pudo avanzar en la ejecución de algunas tareas de la fase preparatoria y en la coordinación de algunas intervenciones en los 64 asentamientos beneficiarios (6.900 familias) en la primera fase del Plan. Tampoco pudo avanzar en la recuperación de las tierras adjudicadas en forma irregular a personas y empresas no sujetas a la reforma agraria, (existen unas 7.800.000 hectáreas en estas condiciones) ni en la compra de tierras solicitadas por las organizaciones campesinas en los asentamientos, por los obstáculos promovidos en el Poder Judicial, por un lado, y el Congreso Nacional, al no aprobar a tiempo el préstamo de 100 millones de dólares del Banco Mundial, en el que estaba incluido parte del financiamiento para el operativo.
- ✚ El Plan de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, y el Programa de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar, lanzados en el segundo semestre del 2009, con la asistencia de la FAO y el gobierno brasileño, respectivamente, apuntan al mismo sector rural, para superar el hambre, la desnutrición, las enfermedades y muertes prevenibles con el cuidado a la alimentación, con base en la producción agropecuaria orgánica y el cuidado del ecosistema, la diversificación productiva, la generación de empleo e ingresos dignos en las familias campesinas. En el primer caso, la primera fase beneficia al departamento de San Pedro, uno de los de mayor incidencia de la pobreza y de la violencia.
- ✚ El programa de viviendas no ha tenido avances en cuanto a construcción, sino en la reestructuración del sistema de compra de tierras y adjudicación de las viviendas, en el caso de la Secretaría de Acción Social, quien se propuso revertir la imagen institucional, clientelista y corrupta heredada de los gobiernos anteriores. En el caso del Consejo Nacional para la Vivienda (CONAVI) no se han aclarado las causas por la baja ejecución y las notas periodísticas aluden a problemas en la gestión institucional.
- ✚ Los sistemas de protección a las trabajadoras y los trabajadores. El aumento del empleo digno, la capacitación laboral y el aumento al acceso al programa de seguro médico, y de jubilaciones y pensiones del Instituto de Previsión fueron los resultados buscados por la planificación y las acciones del nuevo gobierno de la APC para superar el atraso social, la informalidad de las empresas privadas que funcionan en forma irregular, que no cumplen con sus obligaciones tributarias ni protección social a sus trabajadores, y que mantienen el alto margen de subocupados, el problema principal del empleo en el país. El Ministerio de





Justicia y Trabajo (MJT) ha iniciado acciones para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, ejerciendo control *in situ* sobre la implementación de las leyes y normativas laborales en los sectores de mayor retraso social, como en el caso de los choferes del transporte público, los establecimientos agrícolas ganaderos, las empresas caleras de Vallemí (norte de la región Oriental), entre otros. Etc. También, una amnistía laboral con la que busca inscribir y formalizar a las empresas para que aumente la cobertura del seguro social obligatorio del IPS para los trabajadores y trabajadoras. Ha instalado nuevos programas de promoción como el del Trabajo Decente (dignos, adecuadamente remunerados y protegidos), con la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, orientado a la generación de empleo vinculados con la microempresa..

- ✚ En septiembre, ha extendido el seguro médico del IPS a las trabajadoras y trabajadores domésticos. El beneficio incluye a trabajadores y trabajadoras de 18 años de edad en adelante, y que estén ocupados como choferes del servicio familiar, amas de llave, mucamas, lavanderas, y/o planchadoras en casa de familia, niñeras, cocineras de las casas de familias y sus ayudantes, jardineros en relación de dependencia y ayudantes, cuidadores de ancianos, enfermos y minusválidos, mandaderos y trabajadores domésticos para actividades diversas del hogar. El grupo familiar que estará protegido será exactamente igual al del régimen general actual (esposos, esposas, hijos, hijas menores de 18 años e incapacitados, padres mayores de 60 años que vivan bajo la protección de la asegurada, asegurado). Se estima que la cobertura del seguro médico del IPS se extiende con esta medida, a por los menos 150.000 titulares, además de sus grupos familiares.
- ✚ En cuanto a las empresas públicas, que cubren las áreas del servicio básico a los hogares y de infraestructura industrial y comercial (electricidad, comunicaciones, agua potable, producción de cal y cemento, distribución del combustible, puertos y aduanas), el gobierno nacional ha expresado su decisión de mantenerlas y sanearlas; incluso está gestionando la re-estatización de la única acería del país, privatizada en los años noventa. La herencia recibida de los gobiernos anteriores es la sobrepoblación de funcionarios y técnicos, sin perfil adecuado, y sin funciones específicas, así como el déficit de facturación y cobertura; baja inversión y problemas de obsolescencia y paralización de los equipos, y el sistema de corrupción imperante. Los avances, sin embargo son excepcionales en ese sentido, y las presiones del Partido Colorado son constantes y amenazantes en cuanto al despido del personal, mayoritariamente ligado a dicho partido.
- ✚ La inversión en obras públicas y la concesión de rutas. No obstante la decisión de mantener las empresas públicas, la APC proyecta otorgar en concesión las tres rutas principales de la región Oriental, de mayor tráfico y rentabilidad, y dos tramos desprendidos de las mismas, a la inversión privada. Las concesiones serían por tramos, por un total de 870 km y 450 millones de dólares de inversión estimada, a un plazo promedio de 25 y un máximo de 30 años de retorno. El Proyecto ampliará a doble vía; construirá el tercer carril y circunvalatorias en dos; hará mantenimiento en las tres, y operará en dos de ellas, dentro de



la estrategia de alianza público – privadas establecida por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en su Plan Estratégico 2008 – 2013. Forma parte del nuevo modelo de gestión que incorpora la participación del sector privado y los gobiernos subnacionales, gobernaciones y municipalidades, en el financiamiento, la inversión, la operación y el mantenimiento de la infraestructura, siendo los “Contratos de Concesión. Contratos de Inversión, Operación y Mantenimiento” una de sus líneas de acción. El proyecto se encuentra en el Congreso Nacional para su aprobación en el presente mes, y tiene dictamen favorable de sus comisiones de estudio.

- ✚ Los avances en las negociaciones sobre la Itaipú con el Brasil. Son históricas y dependen actualmente de su aprobación en el Congreso Nacional del Brasil. Consiste en la respuesta positiva a los seis puntos reclamados por el Paraguay, sobre la soberanía energética, el precio justo, y la terminación de las obras previstas en el Tratado, para favorecer una mayor distribución y consumo industrial de la energía que le corresponde al Paraguay, con la posibilidad de venta de la energía que le corresponde a terceros mercados (Argentina, Chile), aunque se mantenga la preferencia de venta al Brasil. Incluye además, otros acuerdos sobre el comercio de triangulación que opera en Ciudad del Este, y obras de infraestructura de mantenimiento y construcción de puentes binacionales, y conexión ferroviaria entre las zonas productivas de grano.
- ✚ La puesta al día de las transferencias a las gobernaciones y municipalidades del 50 % de los ingresos por las regalías pagadas por las hidroeléctricas binacionales, Itaipú y Yacyretá, según criterios establecidos por Ley (1999) y de las demás transferencias vinculadas con la descentralización fiscal. En los gobiernos anteriores dichas transferencias tenían un carácter irregular, pues en su ejecución se favorecía a los gobiernos a cargo del Partido Colorado, y los pocos opositores recibían a un ritmo muy lento y en forma incompleta las transferencias correspondientes.

### **¿Es de izquierda la política económica de la APC?**

Esta pregunta de si la política económica del Presidente Lugo es de izquierda fue planteada desde el inicio de este trabajo, y para responderla hemos reunido elementos de contexto, documentos y acciones que echen luz sobre el punto, además de realizar algunas entrevistas con líderes políticos y técnicos del país.

Una primera aproximación consistió en aclararnos si el Presidente Lugo es de izquierda o no, como lo sostienen unos y lo niegan otros, desde su propia campaña electoral. Sobre la respuesta hay consenso: para el contexto del Paraguay, él si es de izquierda, asociada con la Teología de la Liberación y su trabajo pastoral, social, en solidaridad constante con la lucha de los campesinos, por la tenencia y posesión de la tierra, el precio justo de sus productos, la defensa del medio ambiente y la salud de las familias campesinas ante el uso indiscriminado de los agrotóxicos y la violación de las leyes ambientales. En su campaña electoral sostenía que las ocupaciones de tierra y la formación de asentamientos precarios en ellas, eran el efecto de la falta de actuación del





Estado, de ejecución de un programa de distribución de tierra. No obstante, como Presidente de la República se ubicó en el centro, según ha manifestado en numerosas ocasiones.

Si se amplía la pregunta a su gabinete ministerial, la respuesta es que este gabinete es de centro – izquierda. Hay una mezcla de profesionales y líderes políticos de izquierda, desde socialdemócratas, agrupados en dos pequeños partidos, hasta ex militantes de la ultraizquierda congregadas en la Alianza Socialista, y el Espacio Unitario. Mientras que el PLRA, mayoritario, fluctúa entre el centro y la derecha. El propio Vicepresidente y su familia, entre los que se cuenta a dos senadores; una Diputada y un Intendente, ha liderado convocatorias a la prensa, discusiones y votos en el Congreso Nacional en contra de las iniciativas del Ejecutivo, en particular, las relacionadas con las ocupaciones de tierras y manifestaciones de las organizaciones campesinas para obtener medidas favorables a la reforma agraria, incluyendo la demanda de cambio del Fiscal General del Estado, quien no ha sido cambiado..

Las políticas económicas y sociales asociadas a los planes referidos parten de enfoques globales, integrales, para plantearse objetivos, estrategias y acciones avanzadas en el cumplimiento de los derechos humanos, económicos, sociales, y ambientales, pero manteniendo algunas lógicas monetaristas, cuantitativistas y subjetivistas de la economía. Tal es así que el manejo de la política monetaria y de precios, busca la estabilización de los precios, los salarios, y del tipo de cambio. En este último caso implica sostener una tendencia de aumento de las Reservas Monetarias Netas, para dar seguridad y estabilidad al capital, por un lado, Además, captar recursos de los bancos y financieras en Letras de Regulación Monetaria, con tasas de interés atractivas para el corto y mediano plazo, a modo de restringir la cantidad de circulante en el mercado. Esta dinámica afecta también la ejecución de los desembolsos del crédito externo y de las acciones financiadas con este recurso. No se ha comprometido con un Programa de Estabilización con el FMI, como el gobierno anterior que lo implementó durante los cinco años de duración, pero sostiene el patrón de estabilidad, y en ese marco prevé un pequeño déficit fiscal como efecto de la implementación del plan anticrisis. 2009 - 2010.

En el caso de la concesión de las rutas nacionales al sector privado, mencionadas más arriba, fue justificada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, quién presentó el proyecto al Congreso Nacional en septiembre, como una forma de liberar recursos públicos para la ejecución de las políticas sociales, y hacer frente a las necesidades considerables de inversión en el mejoramiento de las condiciones de las tres rutas mediante la inversión privada, ya que las mismas son las de mayor tráfico y permiten dar rentabilidad a la inversión privada, y dejar a la inversión pública las rutas y caminos vecinales que sólo pueden ser cubiertas por el Estado. Pero es preocupante que el gobierno de la APC que se propone cambios estructurales para superar la pobreza y la desigualdad social ofrezca al sector privado una inversión y servicio público de largo plazo, como son las rutas nacionales, para ser explotadas bajo las lógicas de la rentabilidad empresarial privada, en un país que tiene un 38 % de población pobre y un mercado interno desmantelado por la indiscriminada apertura externa.



Para terminar, queremos plantear otros dos puntos. Por un lado, no podemos esperar una política económica de izquierda del gobierno de la APC, donde el partido mayoritario, el PLRA, pasa por una gama amplia desde el centro hacia la derecha, y hasta la ultraderecha en el caso de algunos de sus exponentes que implementan una conducta persecutoria sobre el Presidente y su gabinete, en relación con su apertura (visitas, presencia en algún evento convocado por las izquierdas) hacia los líderes de izquierda. Asimismo, y esto nos parece tan o más grave que el anterior, la persecución se vuelve paranoica en el caso de las visitas mutuas con los líderes de la izquierda latinoamericana de los gobiernos de Bolivia, Ecuador y principalmente, Venezuela y su política de socialismo del siglo XXI. La prensa escrita, radial y televisiva es el canal por donde se expresan los reclamos y acusaciones en este sentido hacia el Presidente Lugo.

Además de esta intolerancia hacia la izquierda, dentro y fuera de la APC, el control de la oposición en el Congreso Nacional y en el Poder Judicial, dificultan los proyectos y las acciones del gabinete del Presidente Lugo. Este gobierno, de hecho no se propuso instalar el socialismo en el Paraguay, pero los cambios estructurales que se propuso instalar necesitan de definiciones económicas, políticas, ideológicas y prácticas que pasan por crear consenso dentro del propio movimiento que lo sostiene, y por afectar de manera importante el modelo de desarrollo vigente, que por otro lado, es insostenible. El triunfo de Fernando Lugo es el síntoma de ello, y su gobierno de apertura tiene la misión de llevar el proceso de transición hacia el otro desarrollo, humano y sostenible, en los próximos cuatro años.

Asunción, 09 de diciembre de 2009

---

### Referencias bibliográficas

1. La reforma agraria en Paraguay, *Informe de la Misión Investigadora FIAN – Vía Campesina*, febrero 2007, versión pdf para descargar, en [www.landaction.org](http://www.landaction.org)
2. Ministerio de Hacienda, 2009, *Plan Estratégico Económico y Social 2008 – 2013*, Asunción (versión digital), en [www.hacienda.gov.py](http://www.hacienda.gov.py)
3. CODEHUPY, 2009, *Informe sobre Derechos Humanos en Paraguay 200*, en [www.pojaju.org/redes/](http://www.pojaju.org/redes/) CODEHUPY

